Ciudad de México, 11 de septiembre de 2018.

Versión estenográfica de la Sesión Pública de Resolución de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, efectuada el día de hoy.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Da inicio la Sesión Pública convocada para el día de hoy.

Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, por favor, verifique el *quorum* e informe sobre los asuntos listados para su resolución.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Con su autorización, Magistrado Presidente.

Se hace constar que se encuentran presentes la Magistrada y los Magistrados que integran el Pleno de esta Sala Regional, por lo que existe *quorum* para sesionar válidamente.

También le informo que serán materia de resolución dos juicios de revisión constitucional electoral y trece recursos de apelación, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables, precisados en el aviso publicado en los estrados de esta Sala.

Es la relación de asuntos programados para hoy, Magistrada, Magistrados.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Gracias, Secretaria General.

Magistrada, Magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta Sesión Pública.

Si hay conformidad les pido, por favor, lo manifestemos en votación económica.

Se aprueba.

Secretaria de Estudio y Cuenta Alba Zayonara Rodríguez Martínez, por favor, presente los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno el Magistrado Héctor Romero Bolaños.

Secretaria de Estudio y Cuenta Alba Zayonara Rodríguez Martínez:
Con su autorización, Magistrado Presidente, Magistrada, Magistrado.

Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de revisión constitucional electoral 190 del año en curso, promovido por el Partido Encuentro Social, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la citada entidad federativa, mediante la cual resolvió el recurso de inconformidad 80 de 2018, promovido por el actor, para controvertir los resultados de la elección de la diputación por el principio de mayoría relativa en el Distrito 22 Electoral de Puebla.

En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar fundados e inoperantes los agravios formulados por el actor, para controvertir la sentencia que impugna, mediante la cual el Tribunal responsable, determinó confirmar los resultados de la elección en comento.

Lo anterior, al estimar que fue correcto que el Tribunal responsable hubiese confirmado la elección al haber estimado esencialmente que las causas de nulidad de la votación recibida en casilla y de elección, previstas en el Código Electoral Local, invocadas por el partido político, no se actualizaban con los hechos de violencia o irregularidades expresadas por el actor, ni tampoco se materializaban con las pruebas aportadas, junto con su escrito de recurso de inconformidad local.

De tal suerte, que al no haber quedado plenamente acreditada, ni evidenciada la comisión de los actos de violencia señalados por el actor, en cada una de las casillas impugnadas, de acuerdo con el sistema de nulidades, establecido en la Normativa Electoral, ni tampoco, encuadrar en alguna de las causales de nulidad de elección previstas en el Código Electoral local, es que, en el caso, se considera que no le asiste razón al actor, al alegar que el Tribunal responsable analizó en forma incorrecta, los elementos que configuran las causales de nulidad que invocó al promover su medio de impugnación local y que también valoró, de manera incorrecta, las pruebas que aportó para acreditar la actualización de las causales de nulidad, ello al estimarse en el proyecto

que las pruebas no son idóneas, ni suficientes para poder tener por acreditada y evidenciada la actualización de las causales de nulidad en cuestión.

De ahí, que se proponga declarar los agravios infundados e inoperantes, y confirmar la sentencia impugnada.

Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 79 de este año, promovido por MORENA, para controvertir la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de ingresos y gastos de campaña de las diversas candidaturas del actual proceso electoral ordinario en Guerrero.

La consulta, propone declarar infundados los agravios que el actor dirigió para controvertir la calificación como sustanciales y de fondo, que la autoridad realizó respecto de las conductas detectadas en el informe presentado por el partido; ello, al advertir que sí estableció las razones por las que estimó que dichas faltas ameritaban ese calificativo pues, en concepto del Ponente, se coincide con los argumentos que expuso para explicar que, con su ejecución, se vulneraron bienes jurídicos tutelados por la Ley, en materia de fiscalización.

Similar calificativo se propone, para el alegato consistente en la presunta vulneración a la garantía de audiencia del actor, al demostrarse que respecto a cada irregularidad detectada en las conclusiones motivo de controversia en el recurso, la autoridad responsable respetó la señalada garantía, mediante la notificación de los oficios de errores u omisiones, con la oportunidad que le concedió para subsanar o aclarar lo que a su derecho conviniera.

Así también, se propone calificar como infundados los agravios del recurrente, respecto a las conclusiones uno, dos, tres, cinco, siete, ocho, nueve y diez, mediante los que refirió que debido a la falta de información en la resolución impugnada generaba la presunción, de que se le estaba sancionando por los mismos hechos; ello, al advertir con las constancias que integran el expediente que en ninguno de los casos señalados se acreditaba ese hecho.

Sin embargo, en la propuesta se destaca que dicha alegación sí se actualiza respecto a la conclusión cuatro, pues los doce eventos detectados como irregulares, fueron motivo de observación en el primer período respecto a la conclusión dos; por lo que, como se razona en la propuesta, no debió imponerse la sanción por la conclusión cuatro.

De ahí que tal alegato en este caso es parcialmente fundado.

Por otra parte, se proponen infundados los agravios enderezados contra las sanciones impuestas por la autoridad responsable en las conclusiones uno, dos, tres, cinco, siete, ocho, nueve y diez; ello, al advertir que son acordes a los criterios de sanción ajustados inicialmente por la Comisión de Fiscalización y adoptados por la autoridad responsable, en la resolución impugnada.

En otro aspecto, a juicio del Ponente, es parcialmente fundado el agravio relativo a la señalada alegación respecto a la conclusión seis, pues, no obstante, que la Comisión de Fiscalización y el Consejo responsable acordaron disminuir las multas por gasto no reportado al 100 por ciento del monto involucrado, le fue impuesta una sanción por el 150 por ciento de dicho monto, por cuanto hace a esa conclusión.

Con base en lo razonado, en la consulta se propone revocar parcialmente la resolución impugnada por cuanto a las conclusiones cuatro y seis, para los efectos establecidos en el proyecto y confirmar las diversas conclusiones impugnadas en la que las alegaciones del actor se estimaron infundados conforme a lo razonado en la propuesta.

Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 110 de este año, promovido por Movimiento Ciudadano, a fin de controvertir la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativa a las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de, entre otros, Diputaciones y Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el Estado de Puebla.

En primer término, se propone considerar infundada la solicitud de inaplicación del artículo 203, párrafo primero de Reglamento de Fiscalización, pues se estima que la norma combatida es conforme a la Constitución, ello en razón que el partido pretende que se realice un

estudio de constitucionalidad, a partir del análisis aislado de una porción normativa, sin considerar que ésta forma parte de un conjunto de normas que integran el procedimiento de fiscalización, que imponen a la autoridad responsable diversas obligaciones para garantizar el derecho de audiencia.

En este sentido, el artículo 44 del citado Reglamento, dispone que una vez que los sujetos obligados realicen el registro de sus operaciones, se asegurara la garantía de audiencia, toda vez que, generado el reporte con el detalle de los ingresos y egresos, se indicarán las causas y montos de los incrementos y decrementos, a fin de que dichos sujetos confirmen o aclaren las diferencias detectadas.

Acorde a lo anterior, el artículo 137 del aludido reglamento, dispone que, durante el procedimiento de revisión de los informes de campaña, la Unidad Técnica podrá utilizar procedimientos de auditoría, basados en pruebas electivas, a través de las cuales solicite directamente a terceros, confirmen, ratifiquen o rectifiquen las operaciones reportadas por los partidos, coaliciones y candidaturas independientes.

Luego entonces, de los resultados de las confirmaciones, se informará en el Dictamen Consolidado correspondiente, considerando el derecho de audiencia, tanto de la persona física a la que se le realizó la confirmación, como del sujeto obligado que la reportó.

De ahí que las diversas actuaciones realizadas por la autoridad responsable, cumplen con los principios referidos.

Finalmente, respecto a las conclusiones emitidas en las que se le impusieron determinadas multas, se advierte que los agravios expresados para controvertirlas, no combaten de manera directa las razones y fundamentos, en que se sustentó la autoridad responsable para imponer las diversas sanciones al partido, al emitir la resolución impugnada, tanto en lo individual como integrante de la coalición, por la comisión de conductas que estimó transgresoras de los principios que rigen la fiscalización.

Esto es, los argumentos del partido son genéricos e insustanciales y, no permiten hacer un estudio respecto de algún tema en concreto, en torno a las supuestas violaciones que aducen. En consecuencia, no desarrolla

argumentos tendentes a combatir frontalmente las consideraciones contenidas en la resolución impugnada.

De lo anterior, se propone confirmar, en lo que fue materia de impugnación y competencia de esta Sala Regional, la resolución impugnada.

Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 114 del año en curso, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del Dictamen Consolidado y resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña, de las candidaturas a Diputaciones locales, integrantes de Ayuntamientos en el Estado de Morelos.

En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar fundado el agravio formulado por el actor, para controvertir la acreditación de la conclusión 2 C28 P2, consistente en que omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, durante la campaña, excediendo los tres días posteriores en que fueron realizadas por un importe de 2 millones 407 mil 200 pesos, y por la que, la responsable determinó imponerle una sanción económica.

Ello, pues no obstante que el actor es a quien corresponde probar su alegato, consistente en que realizó el registro de sus operaciones fuera de tiempo, debido a anomalías o fallas en el funcionamiento del Sistema Integral de Fiscalización y que, de las pruebas técnicas que ofreció, se desprenden indicios, en particular, respecto a las circunstancias de tiempo, en el caso ocurre que, del propio Dictamen Consolidado impugnado, se advierte que la responsable reconoce que el día veintiuno de mayo hubo fallas y anomalías en el funcionamiento del aludido sistema, con lo cual se corrobora lo expresado por el actor, de tal suerte que, al advertir que existe un día en el que las partes coinciden en que efectivamente hubieron fallas o anomalías en el funcionamiento del señalado sistema, se estima que en la especie, opera una excepción al caso.

De ahí que se considere que le asiste la razón al actor, y que se proponga declarar el agravio fundado y suficiente para revocar los actos impugnados, dejándolos insubsistentes, solamente, por lo que hace a

la conclusión y a la sanción que le fue impuesta, para el efecto de que la responsable dentro de un plazo de diez días naturales, en ejercicio de sus atribuciones dicte una nueva resolución, tomando en cuenta los hechos acreditados.

Es la cuenta, Magistrada, Magistrados.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Gracias, Alba.

Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta.

A votación Secretaria General.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Como lo indica, Magistrado Presidente.

Magistrada María Silva Rojas.

Magistrada María Guadalupe Silva Rojas: A favor.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Magistrado Héctor Romero Bolaños.

Magistrado Héctor Romero Bolaños: A favor de los cuatro proyectos.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Magistrado Presidente Armando Maitret Hernández.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: A favor.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Magistrado Presidente, los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Gracias.

En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 190 de este año, se resuelve:

ÚNICO.- Se **confirma** la sentencia impugnada.

Por lo que hace al recurso de apelación 79 del año en curso, se resuelve:

PRIMERO.- Con base en los motivos expuestos se **revoca parcialmente** la resolución impugnada respecto a las sanciones impuestas por las conclusiones 4 y 6, para los efectos previstos en la ejecutoria.

SEGUNDO.- Se **confirma** la resolución impugnada en sus restantes consideraciones.

En cuanto al recurso de apelación 110 de este año, se resuelve:

ÚNICO.- Se **confirma** la resolución impugnada en lo que fue materia de controversia.

Finalmente, en el recurso de apelación 114 de la presente anualidad, se resuelve:

PRIMERO.- Se **confirman** el dictamen consolidado impugnado y la resolución impugnada en lo que fueron materia de controversia con respecto a las conclusiones señaladas en la ejecutoria.

SEGUNDO.- Se **revocan** el dictamen consolidado y la resolución impugnadas solamente por lo que hace a la conclusión precisada en la sentencia para los efectos establecidos en la misma.

Secretaria de Estudio y Cuenta Frida Rodríguez Cruz, por favor, presente los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno.

Secretaria de Estudio y Cuenta Frida Rodríguez Cruz: Con su autorización, Magistrado Presidente, Magistrada, Magistrado.

Doy cuenta, con el proyecto de resolución correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral 192 de este año, promovido por MORENA, a fin de controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, mediante la cual, confirmó el cómputo

distrital de la elección para la diputación de mayoría relativa, en el Distrito Electoral Uninominal 2 con cabecera en Huauchinango, en dicha entidad federativa, sí como la declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría respectiva.

En el proyecto de cuenta, la ponencia propone calificar los agravios del partido recurrente, en parte inoperantes, y por otra infundados, ello, porque como se advierte en el proyecto, MORENA se limita a expresar genéricamente que el Tribunal responsable omitió valorar correctamente sus pruebas, sin especificar, en forma clara y precisa, cuáles son los medios de prueba que se valoraron indebidamente, lo cual hace que su estudio resulte ineficaz para modificar o revocar la resolución reclamada.

Por otra parte, por cuanto hace al argumento relacionado con el desechamiento de hecho, de las pruebas por parte del Tribunal local, que MORENA señala a manera de ejemplo, para cuestionar la supuesta valoración sesgada, realizada en la resolución impugnada, el mismo se propone calificarlo como infundado, pues estima, que sí se realizó un análisis valorativo e integral de las mismas al establecerse que los elementos aportados por dicho partido, no fueron pertinentes para demostrar los hechos, motivo de la nulidad que reclamó en la instancia local.

Finalmente, los restantes agravios expresados por el partido actor, se propone declararlos como inoperantes, ya que MORENA se limita a impugnar únicamente aspectos accesorios y no controvierte las consideraciones torales que sirvieron de base al Tribunal responsable, para desestimar su pretensión de nulidad en la instancia previa, razón por la cual, en la propuesta, se sostiene que, dichas consideraciones deben continuar rigiendo el sentido del fallo.

Por lo expuesto, se propone confirmar la sentencia impugnada.

A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación 129 de este año, interpuesto por el Partido Nueva Alianza, en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, promovido por un ciudadano, en contra del partido

recurrente y su candidato a la Presidencia Municipal de Tepanco de López, Puebla.

En principio, en el proyecto se califica como infundado el agravio en el que el recurrente señala que, para imponer la sanción, de manera incorrecta, el Instituto responsable consideró la matriz de precios de un municipio con diferencias económicas sustanciales al de Tepanco de López, para determinar el costo de las bardas denunciadas.

Se propone, de ese modo, ya que la actuación del Instituto responsable fue acorde con lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización, mismo que permite la utilización de conceptos de costos de municipios diversos al del ámbito territorial involucrado cuando no existe información suficiente para la obtención de precios comparables, siempre y cuando pertenezcan a la misma entidad federativa, tal como aconteció en el caso que se analiza.

Por otro lado, el recurrente aduce que existe falta de motivación en la resolución impugnada, pues estima, que de manera genérica se afirmó que el partido únicamente reportó 61 registros de los 128 que erogó por concepto de gasto de bardas.

En el proyecto, dicho agravio se califica como fundado, puesto que del contenido de la resolución impugnada y sus anexos, no se advierte pronunciamiento alguno que motive la conclusión a la que arribó la autoridad responsable, ya que, no obstante, que en la descripción de la metodología de estudio se precisó que se realizaría un contraste entre la propaganda asentada en el acta circunstanciada y los registros contenidos en el Sistema Integral de Fiscalización, el proyecto advierte, que dicho análisis no fue realizado, pues el Instituto no señaló las razones por las cuales concluyó que existía falta de coincidencia entre las bardas denunciadas y las reportadas a la autoridad fiscalizadora.

Por ende, si la autoridad responsable no expuso las razones que la llevaron a considerar que el partido y su candidato incumplieron con la normatividad aplicable en materia de fiscalización, se propone revocar la resolución impugnada a efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva, debidamente motivada, en la que exponga las razones que la llevaron a concluir que el partido y candidato denunciados omitieron reportar gastos de campaña.

Es la cuenta, Magistrado Presidente, Magistrada, Magistrado.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Gracias, Frida.

Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta.

Magistrada María Silva Rojas.

Magistrada María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.

El motivo de mi intervención es muy breve, y es para explicar por qué estoy a favor del juicio de revisión constitucional 192, en su caso, estas consideraciones son aplicables a muchos otros juicios de revisión, que he estado votando en este Proceso Electoral y se me hace muy importante destacar las razones.

Los juicios de revisión constitucional electoral son juicios que denominamos, bueno, así los denomina la ley, son de estricto derecho. ¿Qué implica el que sean juicios de estricto derecho? Que no podemos hacer suplencia en los agravios, no podemos hacer suplencia en lo que los actores, las actoras manifiestan en la demanda.

Es por esto que, en algunos de estos asuntos, por más que, como en los dos asuntos que se están votando, bueno, uno ya lo votamos y este otro que se pone a nuestra consideración, hay involucrados, por ejemplo, temas de violencia, los dos que son materia en la sesión del día de hoy son del Estado de Puebla y en este Proceso Electoral hemos votado algunos otros del Estado de Guerrero, en los que particularmente, a mí, me ha pesado mucho el tema de la violencia que se suscitó en estos dos Estados.

Sin embargo, si no hay agravios suficientes para controvertir, las razones que dan los Tribunales Electorales, nosotros no podemos hacer un análisis de primera mano, de todos los hechos que nos manifiestan que suceden en las demandas.

A nosotros no nos bastan hechos, para nosotros calificar si la elección fue correcta o fue incorrecta, si fue regular, si fue irregular. Nosotros lo que estamos haciendo en los juicios de revisión constitucional, como el 192, es revisar una sentencia de un Tribunal, que fue quien ya calificó de primera mano todos estos actos y hechos que, en su caso, fueron controvertidos.

Se me hace muy importante esto, porque no soy ajena a los hechos de violencia que se suscitaron en esta jornada, en la pasada jornada electoral; sin embargo, sí quería explicar el motivo por los que he venido votando, en algunos asuntos, en estos juicios de revisión, a favor de las que ahora son sentencias, y por lo que en este caso votaré a favor del proyecto que se propone en el juicio de revisión 192, esto no equivale a que nosotros, digamos, la elección fue íntegra, la elección fue correcta, fue regular.

Esto, simplemente, equivale a decir, nadie pudo destruir la valoración que se hizo ante el Tribunal Electoral local, de lo que en su caso se sometió a consideración del Tribunal.

Nosotros no estamos revisando de primera mano estas elecciones, estamos revisando una sentencia, y el pronunciamiento es respecto de esa sentencia, no respecto de una elección, porque eso a nosotros no nos compete, si no nos ponen los agravios de manera adecuada.

Sería todo.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Gracias, Magistrada.

¿Alguna otra intervención?

Bueno, yo sólo reaccionando a lo que la Magistrada comenta, y desde luego, la propuesta que se formula es en estricta congruencia a lo que hemos resuelto en múltiples casos, de juicios de revisión constitucional electoral y es un tema de técnica procesal totalmente.

Decir y sólo a manera de ejemplo, que ciertamente se exponen muchos argumentos en la demanda primigenia, se aportan pruebas, y el Tribunal

hizo una valoración y esa valoración determina, digamos, la situación jurídica concreta respecto de los hechos que juzgó.

Ante nosotros, durante la instrucción del juicio, revisé con cuidado la demanda, y se expresaron agravios más o menos como los siguientes:

El Tribunal no hace una debida valoración de los elementos de prueba aportados, de los documentos públicos, privados y es en esos términos cuando en el juicio de revisión constitucional electoral lo que se tiene que exponer como agravio es que pruebas no se valoraron de manera adecuada e incluso una buena demanda en materia de juicios de revisiones, ofrecerle alternativa de análisis probatorio, de cómo debió haberse hecho una correcta valoración.

Lo pongo a manera de ejemplo, porque me parece y lo digo totalmente dentro del público está el candidato interesado que vino a vernos en un alegato que, por norma, damos a todas las personas, previo a que se resolvieran sus asuntos, y nos planteaba durante este encuentro privado, todos los hechos que él vivió durante el proceso y que estima quedaban demostrados ante el Tribunal Electoral local.

El tema es que, al revisar jurídicamente el expediente, nos enfrentamos a una demanda que en esta parte lo digo con respeto, es pobre en la argumentación jurídica para destruir eso que bien o mal hizo el Tribunal Electoral local.

Y es por eso que, como bien señala la Magistrada, en estricta congruencia con lo que hemos resuelto en diversas ocasiones, la propuesta viene por confirmar la sentencia impugnada.

No sé si haya alguna otra consideración.

De no ser así, a votación, Secretaria.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera:
Como lo indica, Magistrado Presidente.

Magistrada María Silva Rojas.

Magistrada María Guadalupe Silva Rojas: A favor.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera:
Magistrado Héctor Romero Bolaños.

Magistrado Héctor Romero Bolaños: A favor de los dos proyectos.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera:
Magistrado Presidente Armando Maitret Hernández.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: A favor.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera:
Magistrado Presidente, los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Gracias.

En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 192 del año en curso, se resuelve:

ÚNICO.- Se **confirma** la sentencia impugnada.

Por lo que hace al recurso de apelación 129 de este año, se resuelve:

ÚNICO.- Se **revoca** la resolución impugnada.

Secretario de Estudio y Cuenta Daniel Ávila Santana, por favor, presente los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno la Magistrada María Silva Rojas.

Secretario de Estudio y Cuenta Daniel Ávila Santana: Con su autorización, Magistrado Presidente, Magistrado, Magistrada.

Doy cuenta con el proyecto de resolución de los recursos de apelación 60, 61, 84, 92, 95 y 120, todos de este año, presentados por el PES, el PAN, Víctor Hugo Romo, en su carácter de candidato a la Alcaldía de Miguel Hidalgo y MORENA, a fin de controvertir del Consejo General del INE:

1: La resolución de la queja en materia de fiscalización, iniciada por el PAN, contra el mencionado candidato;

2: El Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a, entre otras cosas, Alcaldías en la Ciudad de México; y,

3: La resolución relativa a la revisión de ingresos y gastos de campaña.

En primer lugar, el proyecto propone acumular los recursos 61, 95 y 120 al 60 por ser el más antiguo, con la mención de que, los recursos 84 y 92 ya habían sido acumulados por acuerdo plenario.

Enseguida, se propone sobreseer el recurso de apelación 84, pues es extemporáneo, ya que la representante del PAN estuvo presente en la Sesión del Consejo General del 6 de agosto, en que se acordó la resolución impugnada y, en consecuencia, operó la notificación automática, por lo que, si la demanda fue presentada, hasta el 14 siguiente es extemporánea.

En el estudio de fondo, los agravios se analizan en el siguiente orden:

Recurso de apelación 61. El PAN controvertió el sobreseimiento acreditado en las quejas al considerar que la UTF, debió de continuar la investigación de los hechos planteados y no hacerlas depender de lo resuelto en el dictamen consolidado.

A juicio de la ponente, el PAN parte de una premisa inexacta al considerar que en el procedimiento de queja en materia de fiscalización la UTF debía detallar puntualmente cada uno de los elementos que ampara, cada gasto de campaña, siendo que tales aspectos son propios del dictamen consolidado.

De ahí, que resultan infundados los agravios del PAN en que sostiene que la responsable no fue exhaustiva y fundó y motivó indebidamente su resolución al sobreseer de forma general los eventos denunciados, lonas, bardas e internet.

Por otra parte, si bien el PAN no tiene razón respecto de que la responsable no debía sobreseer respecto a los supuestos gastos que

denunció, lo cierto es que cuando la responsable señaló de manera específica qué eventos sobreseía, debió hacer referencia a cada uno de los denunciados.

De esta manera, hay cuatro eventos que el PAN identificó como no reportados en la agenda del candidato, que no están en la lista de los eventos que la responsable señaló, específicamente, que sobreseía. Estos son: Pacto por la niñez, Serenata de mañanitas; Conferencia de prensa y Salón Candiles, Polanco.

Esto es así, pues del listado de 218 eventos, que remitió a la autoridad responsable, no es posible advertir que hubiere existido algún pronunciamiento respecto de esos cuatro eventos.

De ahí que no pueda considerarse que están incluidos en el sobreseimiento decretado por el Consejo General.

Aunado a lo anterior, en la instrucción se analizó el reporte del catálogo auxiliar de eventos del SIF para determinar si dichos eventos estaban o no contemplados en la agenda del candidato. Sin embargo, atendiendo a la fecha, ubicación, tipo de evento y sus características, no fue posible localizarlos.

Por tanto, se considera sustancialmente fundado el agravio del PAN, de que la responsable omitió pronunciarse respecto de si dichos eventos están o no sobreseídos.

Por lo que hace a la supuesta omisión, de investigar la red social Facebook, resulta infundado el agravio del PAN, toda vez que la UTF sí realizó varias diligencias con el objeto de determinar los hechos denunciados y los gastos que de estos pudieron haber derivado.

Por otra parte, para la ponente es infundado el agravio del PAN, en que reclama que la UTF no fue exhaustiva, pues dejó de realizar las diligencias necesarias al investigar los hechos relativos a cada uno de los eventos denunciados, derivado de lo que, según el PAN, se podría demostrar el exceso de gastos de campaña por parte del candidato.

Contrario a lo manifestado por el PAN, la UTF sí llevó a cabo una serie de actuaciones y diligencias, las que consideró necesarias para

investigar los hechos denunciados. Cabe señalar que la UTF no está obligada a realizar necesariamente sobre cada hecho o conducta denunciada de determinado tipo de diligencias, pues ello depende de la pertinencia de realizarlas, que la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

Por lo que hace al agravio sobre la valoración del deslinde del candidato, se propone calificarlo como inoperante por partir de una premisa falsa, consistente en que se otorgó plena validez a las declaraciones del candidato.

Lo anterior, es así pues en la resolución de quejas la responsable sí estudió las pruebas correspondientes, lo cual implicó un estudio exhaustivo y congruente de las declaraciones del candidato, las cuales estuvieron administradas y valoradas con las demás pruebas que integran el expediente.

Además, contrario a lo referido por el PAN, existe una debida fundamentación y motivación en la resolución de las quejas, toda vez que la responsable expresó los artículos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, en atención a los cuales otorgó valor a las pruebas y explicó por qué otorgaba dicho valor a las mismas; además precisó los artículos de la Ley de Partidos con base en los cuales sancionó al sujeto obligado, explicando por qué encuadraban sus omisiones en el supuesto normativo.

Finalmente, se propone tener como fundado, por una parte, e inoperante por otra, el agravio del PAN relativo a que la responsable no se pronunció sobre las presuntas casas de campaña del candidato que fueron denunciadas. El agravio es fundado, porque la resolución de las quejas carece de congruencia externa, ya que la responsable, lejos de resolver la controversia planteada por el PAN, analizó la omisión de reportar gastos respecto de una casa de campaña distinta a las denunciadas.

En este sentido, en la resolución de quejas no existe ningún pronunciamiento sobre los hechos denunciados por el PAN, respecto del registro contable de la supuesta utilización de esas casas de campaña ni es posible advertir que se hiciera una valoración de las

pruebas aportadas en la que se determinara si existía o no algún indicio para tener por ciertas esas afirmaciones; esto es, si los inmuebles denunciados debían considerarse como gastos de campaña del candidato.

Por otra parte, es inoperante la manifestación del PAN, sobre que la responsable no atendió su petición de realizar visitas de verificación a las casas de campaña denunciadas, pues éstas derivan de un proceso de selección aleatoria previamente aprobado por la Comisión de Fiscalización, el cual solamente elige una muestra porcentual de la totalidad de eventos registrados en una elección.

Recursos de apelación 92, 95 y 120.

Respecto a los agravios formulados por el candidato y MORENA, en relación con la omisión de reportar gastos por 13 videos, la propuesta es declarar fundada esa parte del agravio, ya que la responsable, no precisó qué debía entenderse por artesanal, ni cuál fue el criterio para diferenciar que seis videos contaban con trabajos de producción o edición de este tipo, lo que incide en la determinación del costo y reporte correspondiente.

Dado lo fundado de esa porción del agravio, el resto de los agravios, respecto de los 13 videos en la resolución de las quejas, se tornan inoperantes.

Con relación al audio, se propone declarar infundada esa parte del agravio, por lo siguiente:

- 1.- En la resolución de las quejas, sí está señalado el vínculo del audio con el candidato.
- 2.- La responsable, no determinó que el audio hubiera sido realizado o difundido a solicitud del candidato o MORENA, sino que dijo que, en éste, había una referencia al candidato y la candidatura común, por lo que no era necesario acreditar que el audio hubiera sido publicado en sus redes sociales.

3.- El costo del audio no fue reportado en el SIF, por los sujetos obligados, por lo que fue procedente que se determinara su costo mediante la matriz de precios.

También se propone declarar infundado, el agravio relativo a la omisión de reportar el pago de publicidad en redes sociales por persona desconocida, ya que la responsable advirtió que aunque los videos denunciados fueron encontrados en diversas ligas de internet, ajenas a la página oficial de candidato, éste obtuvo un beneficio directo por propaganda a favor de su campaña, pues propagaba la exposición de sus programas, acciones y plataforma electoral ante el electorado.

Finalmente, por lo que hace al agravio de MORENA, relativo a la falta de exhaustividad en el análisis de la queja, la ponente propone declararlo inoperante, porque los argumentos se contradicen entre sí.

Recurso de apelación 60.

Se propone calificar como infundados los agravios hechos valer por el PES, relativos a que la responsable no observó lo establecido en el Convenio de candidatura común al multarlo.

Lo anterior, ya que el hecho de que el referido convenio estableciera la responsabilidad individual de los partidos que integraron la candidatura común, no los exenta de cumplir sus obligaciones en materia de fiscalización, pues si bien, un convenio emana de la voluntad de las partes, y ésta constituye la norma suprema entre quienes los suscriben, esa voluntad se encuentra condicionada por los límites establecidos en ley y las violaciones a las obligaciones de fiscalización, dan lugar a las consecuencias previstas en las normas cuya aplicación no puede estar sujeta a negociaciones por ser de interés público.

Al resultar fundados los agravios del PAN, respecto a la falta de exhaustividad del sobreseimiento y la omisión de pronunciarse sobre las casas de campaña denunciadas, así como el agravio del candidato y MORENA, con relación a la determinación del costo de 13 videos, la propuesta es revocar parcialmente la resolución de las quejas, y en vía de consecuencia, el dictamen consolidado y la resolución del dictamen en cuanto a dichos temas.

En consecuencia, y atendiendo al próximo período vacacional del INE, se propone dar un plazo de tres días para que la responsable emita una nueva resolución al respecto con las precisiones señaladas en la propuesta.

A continuación, doy cuenta con el recurso de apelación 98, promovido por el PT, contra las resoluciones emitidas por el Consejo General del INE, respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las y los candidatos a diversos cargos de elección popular del proceso electoral ordinario 2017-2018 en Guerrero, Puebla y Tlaxcala.

En primer lugar, se propone calificar infundado el agravio relativo a que la responsable, no respetó el convenio al multarlo, pues si bien el convenio emanó de la voluntad de las partes y constituye la norma suprema entre quienes lo suscriben, esa voluntad se encuentra condicionada por los límites establecidos en ley, y las violaciones a las obligaciones de fiscalización dan lugar a las consecuencias previstas en las normas, cuya aplicación no puede estar sujeta a negociaciones por ser de interés público.

Ahora bien, se propone declarar infundados los agravios relativos a la violación a su derecho de garantía de audiencia para exponer las causas por las cuales no pudo cumplir sus obligaciones fiscales respecto a las candidaturas de Guerrero, así como que la falta de fundamentación y motivación en razón que del expediente se advierte que contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, sí le notificó los errores y omisiones que presentaba su documentación comprobatoria, razón por la cual le solicitó subsanarla, requerimiento que fue desahogado por el PT y en el que hizo las manifestaciones que estimó convenientes.

En el mismo sentido, se propone calificar la falta de fundamentación y motivación que refiere en razón de que la responsable, al analizar las conductas infractoras precisó, entre otras cuestiones, los preceptos jurídicos que estimó aplicables al caso, exponiendo, en cada una de las conclusiones, que se controvierten las razones específicas.

Por otro lado, en relación a la sanción que le impuso la responsable en Puebla, únicamente se limita a precisar el porcentaje de la sanción que le corresponde a cada partido integrante de la coalición, sin precisar el monto total de la sanción y tampoco se precisa si la sanción se impone en UMA o como cantidad líquida, por lo que se propone calificarlo como fundado.

Ello en razón de que una vez revisada la resolución controvertida se advirtió que el Consejo General al sancionar en lo individual no especificó cuál fue el monto total de la sanción que utilizó de base para imponer al PT en lo individual el 72 por ciento de la infracción.

Por último, en relación con la multa que se le impuso en Tlaxcala por no reportar ingresos en efectivo por un monto equivalente al 150 por ciento del monto involucrado y no del 100 por ciento establecido por la Comisión de Fiscalización, se propone calificar fundado el agravio en razón de que los criterios aprobados para establecer los montos de las sanciones le son vinculantes.

De ahí que, si no tomó en cuenta la reducción aprobada al momento de imponer la sanción se considera indudable que incurrió en una falta de congruencia, de ahí lo fundado del agravio.

En ese sentido se propone confirmar la resolución de Guerrero y revocar las resoluciones de Puebla y Tlaxcala en lo que fueron materia de impugnación para los efectos precisados en la sentencia.

Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación 111 de este año, promovido por el PAN contra la resolución del Consejo General del INE que declaró infundado el Procedimiento Administrativo Oficioso en materia de fiscalización de los recursos de partidos políticos, instaurado contra MORENA.

Del análisis del contexto del caso y las pruebas que conforman la indagatoria y los expedientes relacionados con ella, la Magistrada propone declarar esencialmente fundados los agravios hechos valer contra la falta de exhaustividad de la investigación realizada previo a la emisión de la resolución impugnada.

Lo anterior, ya que la responsable pasó por alto que la UTF no agotó la línea principal de investigación relativa a determinar si MORENA había incurrido en gastos por la realización de encuestas durante el proceso interno de selección de candidaturas para el Proceso Electoral local de la Ciudad de México.

En este sentido, la ponencia considera que las pruebas que constan en la investigación permiten advertir elementos que hacen necesario investigar la naturaleza y alcances de la figura de coordinación de organización, en relación con la selección de candidaturas de MORENA en dicho Proceso Electoral, elemento que necesariamente tiene que ser aclarado para poder emitir una resolución en torno a si el partido utilizó encuestas o no para elegir a sus candidaturas y, de ser el caso, si los gastos en que incurrió con motivo de la realización de dichas encuestas fueron o no reportados en el informe de ingresos y gastos correspondiente.

En este sentido, se propone revocar la resolución impugnada y reponer el procedimiento del que emanó para que se realice la investigación correspondiente

Es la cuenta, Magistrada, Magistrados.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Gracias, Daniel.

Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta.

Si me lo permiten, quiero hacer una muy breve intervención en relación con el recurso de apelación 60 y los demás recursos, que se propone su acumulación, incluso algunos ya vienen acumulados a la instrucción del primero que se recibió y que estaban en instrucción en la ponencia a mi cargo.

La intervención obedece a que por supuesto voy a acompañar el sentido de la propuesta, pero no está por demás decir que, en mi concepto, la parte relativa en donde se declara fundado el agravio del PAN vinculado con que en la resolución controvertida el Instituto no hace referencia si cuatro eventos que identifica se encuentran dentro del cúmulo de eventos que sobreesayó o hizo falta el pronunciamiento.

Es decir, el mismo Partido Acción Nacional no tiene claro si dentro de ese cúmulo de asuntos o de eventos por los cuales la autoridad determinó sobreseer, porque estaban reportados en el dictamen correspondiente o en el informe de gastos, la propuesta lo que hace, me parece que, de manera adecuada, porque existe esa duda, es regresarlo para que el Instituto Nacional Electoral lo revise y, en su caso, haga la precisión, o de ser también el caso haga la investigación correspondiente.

Y es que al revisar el SIF, el Sistema Integral de Fiscalización, incluso yo advierto que respecto de estos cuatro eventos hay algunos que gozan de ciertas similitudes. Yo no tengo la certeza que se trate de los mismos eventos.

Por eso acompaño la propuesta que nos formula la Magistrada, porque si bien el denunciante hace referencia como nombre del evento "Pacto por la niñez, Serenata de Mañanitas, Conferencia de Prensa y Salón Candiles, Polanco", hay eventos reportados en esas mismas fechas y que pareciera guardan ciertas similitudes, pero creo que la sentencia que se emita, yo desde luego la acompañaré, va a abonar a la certeza para que la autoridad determine con precisión si estos cuatro eventos que se denunciaron, ya están sobreseídos o si incluso se impuso sanción, porque por algunos de estos a los que acabo de hacer referencia, la autoridad en el procedimiento correspondiente impuso sanción. Pero creo que esto tendrá que aclararse porque insisto, el mismo partido político recurrente, tiene dudas sobre si estos eventos ya fueron sancionados o si la autoridad fue omisa en su análisis y valoración.

Y desde luego, esto pues tiene impacto en el dictamen correspondiente; incluso yo me permití, antes de que se acumularan, hacer una propuesta donde se declaraban totalmente inoperantes los argumentos en contra del dictamen, porque en realidad atacaban la queja que en esencia se está declarando fundada en este procedimiento.

Es lo que yo quería precisar respecto de mi voto y lo hago porque tuve dudas realmente si podíamos someter a una nueva revisión al candidato ganador o al candidato que está en este momento sujeto a la revisión en sus gastos de campaña, y efectivamente no hay precisión en el

dictamen, no hay claridad y creo que es importante en aras de salvaguardar el principio de certeza para todos, que la autoridad haga estas precisiones.

¿No sé si haya alguna otra intervención?

De no ser así, a votación.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Como lo indica, Magistrado Presidente.

Magistrada María Silva Rojas.

Magistrada María Guadalupe Silva Rojas: A favor.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Magistrado Héctor Romero Bolaños.

Magistrado Héctor Romero Bolaños: A favor de los tres proyectos.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Magistrado Presidente Armando Maitret Hernández.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: A favor.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Magistrado Presidente, los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Gracias.

En consecuencia, en los recursos de apelación 60, 61, 84, 92, 95 y 120, todos de este año, se resuelve:

PRIMERO.- Se **acumulan** los recursos de referencia.

SEGUNDO.- Se **sobresee** el recurso de apelación 84 de este año.

TERCERO.- Se **revoca parcialmente** la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral precisado en la sentencia, y en

vía de consecuencia el dictamen consolidado y la resolución del dictamen en los términos precisados en la ejecutoria.

Por lo que hace al recurso de apelación 98 del año en curso, se resuelve.

PRIMERO.- Se **confirma** en lo que fue materia de controversia la resolución precisada en la sentencia.

SEGUNDO.- Se **revocan** en lo que fue materia de impugnación, las resoluciones impugnadas referidas en la ejecutoria, para los efectos establecidos en la misma.

Finalmente, en el recurso de apelación 111 de este año, se resuelve:

ÚNICO.- Se **revoca** la resolución impugnada para los efectos precisados en la sentencia.

Secretaria General de Acuerdos, María de los Ángeles Vera Olvera, por favor, dé cuenta con el siguiente proyecto listado para esta Sesión Pública, dado el sentido que se propone.

Secretaria General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera:
Con su autorización, Magistrado Presidente, Magistrada, Magistrado.

Doy cuenta, con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación 103 del año en curso, en el cual se propone su sobreseimiento, debido a que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la presentación extemporánea de la demanda.

Se llega a tal determinación, puesto que la resolución impugnada fue aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el pasado 6 de agosto, en la cual estuvo presente el representante del recurrente, por lo que operó la notificación automática.

Ello, considerando que fue omitida sin erratas, modificaciones ni adendas en cuanto a su sentido.

En este contexto, el plazo para promover el presente medio de impugnación transcurrió del 7 al 10 de agosto, por lo que si el recurrente presentó la demanda hasta el 14 siguiente, resulta indudable su extemporaneidad.

Asimismo, en la propuesta se destaca que la existencia de una notificación ulterior en forma alguna impide que el plazo para promover el presente medio de impugnación inicia a partir del día siguiente al que se configura la notificación automática; esto es, una notificación posterior no constituyó en una segunda oportunidad para controvertir la resolución.

Es la cuenta, Magistrada, Magistrados.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Gracias, Secretaria General.

A nuestra consideración el proyecto de cuenta.

A votación, por favor.

Secretario General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Con gusto, Magistrado Presidente.

Magistrada María Silva Rojas.

Magistrada María Guadalupe Silva Rojas: A favor.

Secretario General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Magistrado Héctor Romero Bolaños.

Magistrado Héctor Romero Bolaños: A favor del proyecto.

Secretario General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Magistrado Presidente Armando Maitret Hernández.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: A favor.

Secretario General de Acuerdos María de los Ángeles Vera Olvera: Magistrado Presidente, el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad.

Magistrado Presidente Armando I. Maitret Hernández: Gracias.

En consecuencia, en el recurso de apelación 103 de este año, se resuelve:

ÚNICO.- Se **sobresee** el recurso.

Al no haber más asuntos que tratar y siendo las 14 horas con 6 minutos se da por concluida la presente Sesión Pública.

Muchas gracias, y buenas tardes.

- - -o0o- - -